



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

304
FORMA A-5:

PROCEDIMIENTO
RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA
10/2015.

DE
NÚMERO:

SERVIDOR
INVOLUCRADO:

PÚBLICO

Ciudad de México. Acuerdo del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día **veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis.**

VISTOS; para emitir resolución en el procedimiento de responsabilidad administrativa número **10/2015**; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Orden de inicio de investigación. El veintisiete de marzo de dos mil quince, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la realización de una investigación de responsabilidades administrativas al médico , quien se desempeñaba como subdirector de área en la entonces Subdirección General de Servicios Médicos del Alto Tribunal, en relación con los requisitos necesarios para ejercer su profesión o alguna especialidad inherente a la misma y, en

general, por cualquier otra conducta que resultara probablemente constitutiva de incumplimiento de alguna de las obligaciones previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, o que implicara la comisión de una infracción en términos del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Dicho expediente se registró con el número C.I. 10/2015 (fojas 1 a 10).

SEGUNDO. Inicio de investigación y devolución de expediente a la Contraloría.

Una vez integrada la investigación ordenada, el dos de octubre de dos mil quince la Contraloría emitió dictamen de conclusión de investigación en el que se consideró que se contaba con pruebas suficientes que acreditaban, de manera probable, que incurrió en la causa de responsabilidad administrativa prevista en el artículo 131, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplir, de forma probable, con la obligación contenida en el artículo 8, fracción XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al inobservar lo dispuesto en los artículos 83 de la Ley General de Salud y 64 y 65 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica (fojas 186 a 193).



En acuerdo de tres de noviembre de dos mil quince, esta Presidencia tomó conocimiento del resultado de la investigación y, dado que el inicio del procedimiento no exigía su intervención, se devolvió el asunto a la Contraloría para que se dictara el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa (foja 195).

TERCERO. Inicio del procedimiento. En proveído de dieciocho de noviembre de dos mil quince, dictado por el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa a [REDACTED] registrado como

P.R.A. 10/2015, al considerarse actualizada la infracción administrativa prevista en el artículo 131, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplir con la obligación de abstenerse de cualquier acto que implique incumplimiento de disposición legal o reglamentaria relacionada con el servicio público, previsto en el artículo 8, fracción XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con los numerales 83 de la Ley General de Salud, 64 y 65 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica (fojas 198 a 208).

Dicho proveído fue notificado personalmente al probable responsable el uno de diciembre de dos mil quince (foja 213).

CUARTO. Informe de defensas. Por acuerdo de siete de enero de dos mil dieciséis, el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibido el informe de defensas que le fue requerido al servidor público involucrado,

al que acompañó diversas pruebas documentales, las cuales se tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza; asimismo, se admitió la testimonial a cargo de



(fojas 214 a 230).

QUINTO. Cierre de instrucción. Seguido el procedimiento de administrativo de responsabilidad por sus trámites legales y tomando en consideración que no se encontraba alguna prueba pendiente de desahogar ni diligencia que practicar, el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis el Contralor de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró cerrada la instrucción, en términos del artículo 39 del Acuerdo General Plenario



9/2005, y ordenó la emisión del dictamen respectivo (foja 283).

SEXTO. Dictamen de la Contraloría. El veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió dictamen al tenor de los puntos resolutivos siguientes:

[...]

PRIMERO. Se estima que es responsable de la falta administrativa por la que se inició este procedimiento, conforme a lo señalado en los considerandos tercero y cuarto del presente dictamen.

SEGUNDO. Se propone sancionar a con inhabilitación temporal por un año, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de este dictamen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Remítanse los autos del procedimiento de responsabilidad administrativa en que se actúa a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos precisados en la parte final del último considerando.

[...]"

El dictamen de contraloría se sustenta, esencialmente, en que el servidor público sujeto a investigación,

quien al momento de los hechos que se le atribuyen se desempeñaba como subdirector de área de la entonces Subdirección General de Servicios Médicos del Alto Tribunal, incurrió en la

falta administrativa prevista en el artículo 131, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplir con la obligación prevista en el artículo 8, fracción XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con la omisión de observar lo dispuesto en los artículos 83 de la Ley General de Salud, 64 y 65 del Reglamento de la ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicio de Atención Médica, al haber utilizado en las recetas que expedía a los pacientes que acudían al servicio médico del Alto Tribunal el número de una cédula de especialidad que le era ajena.

En consecuencia, como se adelantó, una vez revisados los elementos respectivos a la sanción, el dictamen propuso imponer **inhabilitación temporal de un año** al servidor público sujeto a investigación (fojas 285 a 301).

SÉPTIMO. Trámite del dictamen. El dictamen referido, inserto al expediente del procedimiento de responsabilidad administrativa número **10/2015**, que ahora se resuelve, se remitió al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de este Alto Tribunal, para que conociera y resolviera el asunto, en términos de los



artículos 133, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver en definitiva el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, fracciones VII y XXIII¹, y 133, fracción II², de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo dispuesto en los artículos 23³, 25, segundo párrafo⁴, y 40⁵ del Acuerdo Plenario 9/2005, de veintiocho de marzo de dos mil cinco; en tanto se trata de un servidor público de este Alto Tribunal al que se le atribuye una conducta infractora que no está expresamente

¹ **Artículo 14.** Son atribuciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia: [...] VII. Recibir, tramitar y, en su caso resolver, las quejas administrativas que se presenten con motivo de las faltas que ocurran en el despacho de los negocios de la competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de alguna de las Salas o de los órganos administrativos de la Suprema Corte de Justicia, en términos del Título Octavo de esta ley; [...]

XXIII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos interiores y acuerdos generales.

² **Artículo 133.** Serán competentes para conocer de las responsabilidades de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, así como para aplicar las sanciones a que se refiere el artículo 135 de esta ley: [...] II. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, tratándose de servidores públicos de este órgano, en los casos no comprendidos en la fracción anterior;

³ **Artículo 23.** Son competentes para investigar y conocer de los procedimientos relacionados con las responsabilidades administrativas de los servidores públicos regulados por este Acuerdo, el Pleno, el Presidente y la Contraloría.

⁴ **Artículo 25.** [...] El propio Presidente emitirá la resolución que ponga fin a los procedimientos diversos a los señalados en el citado artículo 24.

⁵ **Artículo 40.** En las resoluciones que dicten el Pleno o el Presidente con las que se ponga fin a los procedimientos de responsabilidades administrativas deberá analizarse la existencia de la conducta infractora y, en su caso, la responsabilidad en su comisión, tomando en cuenta las circunstancias en que se dieron los hechos. De igual manera se verificará que la substanciación del procedimiento se haya realizado conforme a las reglas que prevé este Acuerdo General y, en su caso, se ordenará que se subsane la omisión o deficiencia detectada.

Las resoluciones que dicte el Pleno en los expedientes de responsabilidad administrativa no admitirán recurso alguno. En contra de las resoluciones que emita el Presidente procederá el recurso de inconformidad, en los términos señalados en el presente Acuerdo General.

catalogada como grave, ni se considera como tal en el caso concreto.

SEGUNDO. Análisis de la conducta atribuida al servidor público. Del auto que dio inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, se advierte que la conducta que se atribuye al servidor público sujeto al presente procedimiento,

quien al momento de los hechos que se le atribuyen se desempeñaba como subdirector de área de la entonces Subdirección General de Servicios Médicos del Alto Tribunal, consiste en la falta administrativa prevista en el artículo 131, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplir con la obligación prevista en el artículo 8, fracción XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con la omisión de observar lo dispuesto en los artículos 83 de la Ley General de Salud, 64 y 65 del Reglamento de la ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicio de Atención Médica, al no haber utilizado en las recetas que expedía a los pacientes que acudían al servicio médico de la Suprema Corte el número de cédula de especialidad con la que se ostentaba.





Para definir si la conducta mencionada configura la causa de responsabilidad que se le imputa al servidor público denunciado es necesario, primero, traer a cuentas el contenido del marco normativo relevante aplicable al caso.

En principio, conviene tener en cuenta lo que dispone, en la parte que interesa, el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 113. *Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. (...)*

Por su parte, los artículos 131 de la Ley Orgánica de la Federación y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, establecen:

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Artículo 131. *Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación:*

(...)

XI. Las previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores

*Públicos, siempre que no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional;
(...)*

***Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos***

Artículo 8. *Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:
(...)*

XXIV. *Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público (...)*

El artículo 113 constitucional prevé que las leyes de responsabilidades de los servidores públicos tienen por objeto salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos y comisiones de los trabajadores del gobierno; estos principios están cargados, de alguna manera, de un valor moral al que deben aspirar los servidores públicos a fin de cumplir cabalmente con el servicio que prestan.

De igual forma, todos los funcionarios públicos, antes de tomar posesión de su cargo, deben protestar guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan, lo cual implica aceptar y respetar los estándares que rigen al servicio público.

Por tanto, los servidores públicos están obligados a observar en todo momento las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los

SUPLENTE COPIA



Servidores Públicos, en específico, la fracción XXIV del artículo 8 de ese ordenamiento (de aplicación supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación) que dispone que los servidores públicos deben realizar su función (directa o indirectamente) observando las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que resulten aplicables con las funciones que tienen encomendadas. Esa exigencia se traduce entonces en la premisa de que cualquier acto u omisión que incida en la inobservancia de esas disposiciones, es susceptible de ser sancionable.

Sin que sea relevante la circunstancia de que la norma que contenga la obligación se encuentre o no prevista expresamente en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o en la ley que establece las atribuciones del servidor público.

Lo anterior, en virtud de que la conducta prevista en la fracción XXIV del artículo 8 de la ley de responsabilidades hace referencia a cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa, sin importar la ubicación material de la norma, lo cual adquiere sentido si se considera que, ante la diversidad de funciones que realizan los servidores públicos de la Federación, sería imposible describir

con exactitud todas las conductas u omisiones realizadas en el desempeño del servicio público que podrían implicar el incumplimiento de cualquier disposición jurídica.

De ahí que, en cada caso, debe acudir a un punto de referencia que permita determinar sobre el asunto en particular, atendiendo a las funciones específicas encomendadas y desempeñadas por el servidor público, cuál es la normativa relacionada con el servicio público cuya observancia debe procurar, sin incurrir en actos que impliquen su incumplimiento y, a partir de ello, se puede establecer en el caso específico, qué acciones u omisiones deben realizarse o evitarse en el ejercicio de la función pública encomendada.



En ese sentido, la remisión a las diversas disposiciones legales, reglamentarias o administrativas relacionadas con el servicio público encomendado, se debe analizar en cada caso particular, para así estar en aptitud de concluir si determinada conducta o actuación se encuentra dentro de las facultades encomendadas al servidor público investigado, pues justamente los procesos de responsabilidad tienen por objeto vigilar el óptimo desempeño de las personas físicas encargadas de prestar un servicio encomendado al



Estado, que siempre será de interés social y orden público.

En el caso, la conducta atribuida al servidor público se relaciona con el incumplimiento de la obligación contenida en los artículos 83 de la Ley General de Salud, así como 64 y 65 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica. Dichos preceptos disponen:

Ley General de Salud.

"ARTICULO 83. Quienes ejerzan las actividades profesionales, técnicas y auxiliares y las especialidades médicas, deberán poner a la vista del público un anuncio que indique la institución que les expidió el Título, Diploma, número de su correspondiente cédula profesional y, en su caso, el Certificado de Especialidad vigente. Igualess menciones deberán consignarse en los documentos y papelería que utilicen en el ejercicio de tales actividades y en la publicidad que realicen al respecto."

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica.

"ARTICULO 64. Las recetas médicas expedidas a usuarios deberán tener el nombre del médico, el nombre de la institución que les hubiere expedido el título profesional, el número de la cédula profesional emitido por las autoridades educativas competentes, el domicilio del establecimiento y la fecha de su expedición.

ARTICULO 65. Las recetas expedidas por especialistas de la medicina, además de lo mencionado en el artículo anterior, deberán contener el número de registro de especialidad, emitido por la autoridad competente."

De las disposiciones en materia de salud transcritas se advierte que contienen la obligación a cargo de los especialistas en alguna rama de la

medicina, de consignar en las recetas médicas expedidas por ellos el número de cédula de especialidad otorgada por la autoridad competente.

Para definir si la obligación prevista en los preceptos referidos era o no atribuible al servidor público imputado, es necesario referirse a la copia certificada de la cédula de funciones (folios 24 y 75), a la cual se le reconoce valor probatorio pleno por haber sido expedida por un funcionario facultado para ello, conforme a lo previsto en los artículos 93, fracción II, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de responsabilidades administrativas.



De dicha cédula correspondiente al cargo que ostentaba el servidor público, se advierte que las funciones que tenía asignadas como "Subdirector de Área de Cardiología", vinculadas primordialmente con la rama de la medicina denominada "Cardiología", consistían en:

- "1) Valorar y atender padecimientos crónicos degenerativos para coadyuvar la salud del paciente.*
- 2) Determinar los factores de riesgo cardiovascular en cada paciente.*
- 3) Valorar el comportamiento de la presión arterial durante las actividades normales del paciente, mediante el monitoreo ambulatorio de la tensión arterial.*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

P.R.A. 10/2015

311
FORMA A-1

- 4) *Evaluar la capacidad funcional, comportamiento de la tensión arterial y la presencia de cambios en el ritmo cardiaco, sugestivo para infarto a través de la prueba de esfuerzo.*
- 5) *Conocer las anomalías anatómicas, flujos y las repercusiones hemodinámicas provocadas por las diversas enfermedades cardíacas a través del ecocardiograma, para el diagnóstico oportuno.*
- 6) *Otorgar consulta de medicina general para derivar a las especialidades que correspondan.*
- 7) *Realizar examen médico al personal de nuevo ingreso a este Alto Tribunal para integrar el Expediente Clínico Electrónico.*
- 8) *Realizar chequeo médico al personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para valorar su estado de salud y derivarlo a la consulta de especialidad que corresponda.*
- 9) *Asistir a las comisiones que le son encomendadas de los eventos socioculturales que realiza el Alto Tribunal para las urgencias médicas que se requieran.*
- 10) *Atención de casos especiales intrahospitalarios y domiciliarios"*

Atendiendo a las funciones que desempeñaba el servidor público como "Subdirector de Área de Cardiología", se obtiene que una de las tareas cotidianas en el desarrollo de sus actividades era valorar el estado de salud del personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese rubro, lo que necesariamente podía tener como consecuencia la expedición de recetas médicas.

Principalmente porque, por la propia naturaleza de su cargo, al ejercer como médico especialista, debía emitir recetas a fin de proporcionar a los

pacientes que lo requirieran la información y los datos necesarios, ya sea para dar continuidad a su tratamiento, para realizar algún examen médico, para la adquisición de algún medicamento o para dar cualquier instrucción relacionada con el estado de salud del paciente.

Lo anterior es acorde, además, con lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, que dispone que todo profesional de la salud está obligado a proporcionar al usuario y, en su caso, a sus familiares, tutor o representante legal, información completa sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento correspondientes.

En orden a esa exigencia, es dable concluir que el deber de precisar en las recetas médicas el número de registro de especialidad, contenido en los artículos 83 de la Ley General de Salud, así como 64 y 65 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, forma parte del cúmulo de obligaciones inherentes al cargo que desempeñaba como servidor público del Alto Tribunal.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

P.R.A. 10/2015

312
FORMA A-1

Una vez determinado lo anterior, a continuación se analizará si, conforme a las constancias que integran el expediente, se acredita o no el desacato a la obligación que se le atribuye al servidor público imputado.

Para tal efecto, se toma en cuenta que entre las pruebas que se ofrecieron se encuentra la copia certificada del único formato de receta que se elaboró a nombre del médico

así como cinco recetas que expidió a diversas personas; documentales a las que se les reconoce valor probatorio pleno en términos de lo previsto en los artículos 93, fracción II, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de responsabilidades administrativas. El contenido de dichas constancias es:



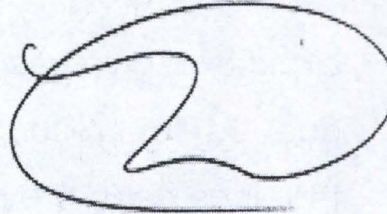
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

U.N.A.M.
R.p.
Médico Cardiólogo
Certificado por el Consejo Mexicano de Cardiología
Cédula de Especialidad
Fecha: 21-Oct-2014

Dra.

Favor de realizar ultrasonido de Varos de
Cuello (Doppler, etc).

Diagnóstico: Enfermedad cerebral
multifarto (lacunares)



Suprema Corte de Justicia de la Nación
Paseo Juárez 30, Col Centro, México D.F.
Código Postal 06060
Tel: 55 22 22 22 ext. 2204



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

P.R.A. 10/2015

312
FORMA A-1

0157

UNAM Médico Cardiólogo
Certificado por el Consejo Mexicano de Cardiología Cédula de Especialidad

Rp.

Fecha: 15 enero 2015

Dr.

Favor de realizar Ultrasonido prostático

Diagnóstico: Prostático

Suprema Corte de Justicia de la Nación
Paseo de la Reforma 222, Col. Centro, México D.F.
Código Postal 06000
Tel. 55 1000 1000 ext. 2204

PODER JUD

UNAM Médico Cardiólogo
Certificado por el Consejo Mexicano de Cardiología Cédula de Especialidad

0158

Hace POSTICISTEC
GUATEMALA

Rp.

Fecha: 23 enero 2015

Cédula de Especialidad

Programar Ultrasonido vesical y
prostático.

Diagnóstico: Antecedente de hematuria,
estenosis uretral
Cáncer vesical met. Bazo.

Suprema Corte de Justicia de la Nación
Paseo de la Reforma 222, Col. Centro, México D.F.
Código Postal 06000
Tel. 55 1000 1000 ext. 2204

1 de 2

U.N.A.M. 0159
 Médico Cardiólogo Cédula de Especialidad
 Certificado por el Consejo Mexicano de Cardiología
 Fecha: 16 Feb 2015

Solicitud de estudio:

Ultrasonido inguinal y escrotal
 bilateral.

Diagnóstico: Hernias inguinales

Suprema Corte de Justicia de la Nación
 Plazo de la 2.ª Sala, México D.F.
 Oficina de Ejecución, C.P. 06060
 Tel. 55 1234 5678



U.N.A.M. 0160
 Médico Cardiólogo Cédula de Especialidad
 Certificado por el Consejo Mexicano de Cardiología
 Fecha: 20 Mayo 2015

① Revisión por Terapia física y
 Rehabilitación

② Diagnóstico: Contractura cervical

Suprema Corte de Justicia de la Nación
 Plazo de la 2.ª Sala, México D.F.
 Oficina de Ejecución, C.P. 06060
 Tel. 55 1234 5678



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

P.R.A. 10/2015

314
FORMA A

De las documentales relacionadas se advierte que todas cuentan en sus márgenes superiores izquierdo y derecho con la referencia de dos números de cédula: el _____, correspondiente a la cédula profesional y el número _____, referente a una especialidad.

A propósito de esas referencias, debe señalarse que, con motivo del informe que le fue solicitado, mediante oficio de diez de junio de dos mil quince la Jefa de Departamento de Jurídico de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública informó que en mil novecientos noventa y ocho se expidió la cédula profesional número _____

_____ a nombre de _____ como médico cirujano.

La funcionaria también señaló que el número de cédula de especialidad número _____

_____ no corresponde a _____ sino a otra persona, e informó que de la consulta al Sistema Integral de Registro del Ejercicio Profesional (SIREP), Sistema Nacional de Profesionistas (FORTÉ-INFORMIX), MENUCONS, PASANTES Y ESPECIALIDADES de esa

dependencia, no se encontró antecedente profesional de dicho médico como especialista en Cardiología o de alguna otra especialidad relacionada con la medicina (foja 148).

La concatenación de las copias certificadas del formato de receta, así como de las cinco recetas firmadas, con el oficio de la Jefa de Departamento de Jurídico de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, es suficiente para acreditar que

_____, quien se ostentó como especialista, incumplió con la obligación legal de consignar en sus recetas médicas el número de registro de especialidad otorgada por autoridad competente.

Esta afirmación se sostiene si se toma en cuenta que en las recetas que expedía con motivo de las consultas que realizaba en su desempeño como subdirector de área en el Alto Tribunal, usaba, para respaldar su calidad de médico con especialidad, el número de cédula de especialidad

_____, sin que ese número estuviera registrado a su nombre en la Dirección General de Profesiones.

No pasa inadvertido que en el expediente obran constancias que acreditan que





culminó estudios de cardiología que, incluso, fueron certificados, como se aprecia del oficio INC/DA/494/2015, del Director de Administración del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" (fojas 170 y 171), así como de la copia certificada de los nombramientos como Médico Residente en Cardiología, de veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y ocho, de nueve febrero de dos mil uno y de uno de febrero de dos mil uno, de primero, segundo y tercer años, respectivamente (fojas 173 a 175).

Sin embargo, en el caso no se está cuestionando propiamente su conocimiento o no en materia de cardiología ni se está poniendo en tela de duda su carácter de médico, sino que el origen de la instauración del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del servidor público y la causa aquí demostrada radica en el incumplimiento de las disposiciones citadas, al no consignar en sus recetas médicas el número de registro de especialidad en cardiología con la que se ostentaba.

Conforme a lo expuesto, se considera que existen elementos probatorios suficientes para tener por acreditado que incurrió en la falta administrativa prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del

Poder Judicial de la Federación, en concatenación con el artículo 8, fracción XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al incumplir con la obligación a su cargo, prevista en los artículos 83 de la Ley General de Salud, así como 64 y 65 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, consistente en precisar el número de registro de su especialidad en las recetas médicas que prescribía como médico cardiólogo, cuando ostentaba el cargo de "Subdirector de Área de Cardiología" en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



No es obstáculo a la decisión a la que se arribó, lo alegado por el servidor público responsable en su informe de nueve de diciembre de dos mil quince (folios 214 a 220 del expediente).

Lo anterior, porque con tales manifestaciones, así como con las pruebas aportadas en ese informe, lejos de desvirtuar la responsabilidad que se le imputa, convalida la existencia de la infracción en que incurrió, como se demuestra a continuación:

Por cuanto hace a las alegaciones del servidor público imputado en el sentido de que, al ingresar a laborar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentó la documentación idónea que



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

P.R.A. 10/2015

314
FORMA A

avala sus conocimientos como Médico Cirujano y en la rama de Cardiología y que nunca presentó cédula profesional en Cardiología, debe decirse que no son aptas para desestimar la responsabilidad que se le atribuye dado que, se reitera, la conducta infractora por la que se inició procedimiento en su contra no se relaciona con el hecho de tener o no estudios suficientes para desarrollar su actividad profesional como médico, sino con no haber consignado en las recetas médicas que expidió el número de registro de la especialidad con que se ostentó.

También deben desestimarse los argumentos de defensa de al manifestar que no dio autorización para la elaboración de las recetas y que nunca le presentaron para revisión el contenido de los formatos de recetas para su visto bueno.

Al respecto, debe señalarse que el propio servidor público reconoció como propias las recetas médicas en las que obra una cédula de especialidad que no corresponde a su persona, lo cual se corrobora con el hecho de que dichas recetas están suscritas con su firma autógrafa.

Debe precisarse que la firma autógrafa es el signo distintivo de la persona que lo estampa, con el

ánimo de adherirse al postulado del escrito e indicar su consentimiento expreso con el contexto de que se trate, en tanto que, de conformidad con el artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de responsabilidades administrativas, la firma hace plena fe de la formación del documento por cuenta del subscriptor, aun cuando el texto no haya sido escrito ni en todo ni en parte por él.

Es por eso que la circunstancia de que los formatos de recetas no hayan sido elaborados por el servidor público y que no exista constancia de que se le haya solicitado su consentimiento previo a la impresión de los recetarios que le fueron proporcionados, no lo desvincula de la autoría de dichos documentos toda vez que, al haberlas suscrito, está reconociendo como propia toda la información ahí contenida, con la consecuente responsabilidad que de ésta derive.

Por estas razones es que tampoco abonan a su causa los testimonios de

(fojas 251 a 253) y de los médicos

(fojas 254 a 256) y

(fojas 261 y 262), dado que se refieren al proceso de autorización, elaboración y entrega de los recetarios que le eran proporcionados con motivo de las consultas



médicas que realizaba en el servicio médico del Alto Tribunal, sin que esos aspectos sean aptos para desvincular al servidor público del contenido de dichas recetas, al contar con su firma autógrafa.

No pasa inadvertida la afirmación del servidor público en el sentido de que cuando recibió los recetarios sólo revisó su nombre y que no sabe de memoria su número de cédula profesional, además de desconocer que para ejercer era necesario portar el documento respectivo.

Sin embargo, la falta de revisión del contenido de los documentos que signó es una circunstancia imputable al propio servidor público, que no lo exime de su responsabilidad en la emisión de esas recetas, que no cumplen con los requisitos legales.

Además, no debe perderse de vista que el servidor público reconoció que cuando fue contratado no presentó cédula de especialidad, por lo que resulta inverosímil que durante los más de siete años que laboró en este Alto Tribunal no se haya percatado que los recetarios que le proporcionaban contaban con información que él no proporcionó, lo cual genera convicción en quien resuelve de que el médico estaba consciente de que la información contenida en las recetas que signaba no era veraz y, en consecuencia, que se estaba incumpliendo

con lo previsto en los artículos 83 de la Ley General de Salud, 64 y 65 del Reglamento de la ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicio de Atención Médica, al no plasmar el número de registro de la especialidad con que se ostentó en las propias recetas que expidió.

En adición a lo anterior, cabe señalar que el hecho de que el propio servidor público en su escrito de defensas reconociera que durante los siete años, siete meses, que aproximadamente laboró en el Alto Tribunal, en seis ocasiones le fueron entregadas para realizar sus funciones *“aproximadamente de 4 mil a 5 mil recetas, divididas en blocks de 50 recetas”*, es demostrativo de que durante todo ese tiempo estuvo en posibilidad de percatarse que tenían impreso un número de cédula de especialidad que no le correspondía, máxime que, como él mismo mencionó, en ningún momento afirmó contar con número de cédula de especialidad, sin que exista constancia de que en algún momento haya solicitado la aclaración correspondiente o se haya negado a recibir los recetarios en los términos referidos.

Tampoco son aptas para desvirtuar la responsabilidad que se le imputa al servidor





público las recetas médicas que exhibió, relativas a las consultas que realiza fuera de la institución.

Lo anterior, en virtud de que aun cuando se les otorgara valor probatorio pleno a tales documentos, lo cierto es que son ineficaces para desvirtuar la infracción materia de este procedimiento pues, con independencia de que tales formatos demostraran que en el ejercicio privado de su profesión son los que expide

a las personas que acuden a su consulta privada, ello no controvierte ni desvirtúa el hecho demostrado en autos de que, en su desempeño en el Alto Tribunal, expidió recetas médicas que incumplían con los requisitos legales, al no tener el número de cédula de especialidad con la que se ostentaba.

En consecuencia, las manifestaciones de defensa que hace valer resultan ineficaces e infundadas para desvirtuar su responsabilidad, en tanto que con las pruebas que obran en el expediente se encuentra plenamente acreditada la falta por inobservancia a la obligación contenida en el artículo 8, fracción XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con los numerales 83 de la Ley General de Salud, 64 y 65 del Reglamento de la Ley General de Salud en

Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, toda vez que en las propias recetas que expidió cuando ostentaba el cargo de “Subdirector de Área de Cardiología” en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, omitió plasmar el número de registro de la especialidad en cardiología con que se ostentó.

TERCERO. Sanción. A efecto de llevar a cabo la individualización de la sanción, resulta indispensable atender a lo previsto en los artículos 45 y 46 del Acuerdo General 9/2005 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes referido, que establecen:



Artículo 45. *Las sanciones aplicables a los servidores públicos que incumplan las obligaciones previstas en el artículo 2o. de este Acuerdo, consistirán en:*

- I. Apercibimiento privado o público;*
- II. Amonestación privada o pública;*
- III. Sanción económica;*
- IV. Suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de tres días ni mayor a un año;*
- V. Destitución del puesto;*
- VI. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público; y,*
- VII. Pérdida del respectivo cargo, de las prestaciones y beneficios en términos del párrafo último del artículo 101 constitucional.*

Artículo 46. *Para la individualización de las sanciones antes mencionadas se tomará en cuenta lo dispuesto en los artículos 13, párrafos octavo, penúltimo y último, 14 y 15 de la Ley.*

En concatenación con lo anterior, el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidades



Administrativas de los Servidores Públicos dispone:

Artículo 14. Para la imposición de las sanciones administrativas se tomarán en cuenta los elementos propios del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, que a continuación se refieren:

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base en ella;

II. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público;

III. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor; entre ellos la antigüedad en el servicio;

IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y

VI. El monto del beneficio, lucro, o daño derivado del incumplimiento de obligaciones.

Para los efectos de la Ley, se considerará reincidente al servidor público que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el artículo 8 de la Ley, incurra nuevamente en una o varias conductas infractoras a dicho precepto legal.

Conforme a lo preceptuado por este último artículo, se procede a individualización de la sanción que corresponda a

en los términos siguientes:

I. Por cuanto hace a la **gravedad de la infracción** en que incurrió, se señala que, aunque no se trata de una conducta catalogada como grave conforme al artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ésta se considera grave en sí al ser altamente reprochable por vulnerar el principio de legalidad que requiere atender la obligación contenida en la fracción XXIV, del

artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pues quedó acreditado que el citado servidor público, cuando ostentaba el cargo de “Subdirector de Área de Cardiología” en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expidió recetas en las que omitió plasmar el número de registro de la especialidad en cardiología con que se ostentó.

La gravedad del reproche resulta de que la omisión de ese requisito al expedir sus recetas no resulta de un simple error mecanográfico o de impresión en el documento, sino que se trata de una conducta consciente y continuada por parte del servidor público, de expedir recetas que no contaban con el requisito legal consistente en el número de registro de la especialidad correspondiente.

La circunstancia de que el servidor público conocía de su obligación de mencionar en las recetas el número de registro de la especialidad con que se ostentó y aun así no lo hizo, se corrobora con el hecho de que las recetas que él expedía sí contaban con un número de especialidad, sólo que éste no correspondía a un registro propio, sino de una persona diversa.





Debe precisarse que el hecho de que el propio servidor público reconozca que hizo uso de las recetas médicas con datos incorrectos durante los más de siete años que laboró en el Alto Tribunal, sin que en ningún momento hiciera alguna aclaración al respecto, es indicativo de que la emisión de recetas en los términos en que lo hizo se trató de un acto volitivo y consciente de faltar a la verdad, en aras de simular el cumplimiento del requisito respectivo, lo cual amerita la imposición de una sanción de mayor rigor.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 2a. LXXIX/2009, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, julio de dos mil nueve, que se transcribe a continuación:

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. El citado precepto no viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el hecho de no establecer un parámetro que indique los grados de gravedad de la infracción en que puede incurrir el servidor público en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, ya que del enunciado normativo se advierten otros indicadores que permiten a la autoridad administrativa determinarlos toda vez que,

conforme a su contenido, para imponer las sanciones, debe tomar en cuenta la gravedad de la responsabilidad en que se incurra conjuntamente con la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o las que se dicten con base en ella; además, la expresión "gravedad de la responsabilidad en que se incurra" contenida en el artículo 14, fracción I, de la Ley citada, no constituye un elemento aislado a partir del cual la autoridad pueda determinar arbitrariamente la sanción correspondiente, sino que debe ser proporcional en tanto que aquélla habrá de ponderarla objetivamente con las demás fracciones del propio dispositivo legal, lo cual acota sus atribuciones para imponer la sanción.

Asimismo, por cuanto hace a la **conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones legales aplicables**, no debe dejarse de lado que la importancia de este asunto no recae solamente en la obligación de la Suprema Corte de sancionar a sus funcionarios que hayan incurrido en una causa de responsabilidad administrativa, sino que su incidencia impacta en sentar un precedente en relación con la necesidad de suprimir prácticas en el servicio público que impliquen o puedan ser percibidas socialmente como conductas deshonestas o no profesionales por parte de sus servidores públicos.



II. Por lo que atañe a las **circunstancias socioeconómicas** del infractor, este elemento de individualización resulta irrelevante, ya que no se propondrá sanción económica.

III. En lo atinente al **nivel jerárquico y antecedentes del infractor**, de las constancias de autos se desprende el hecho de que

_____ tiene estudios de Médico Cirujano e, incluso, en la rama de Cardiología, y que al momento de los hechos materia del presente asunto, ocupaba el cargo de subdirector de área y tenía una antigüedad acumulada en el Alto Tribunal de siete años, siete meses y veintisiete días (foja 280).

IV. Por lo que se refiere a las **condiciones exteriores y los medios de ejecución**, debe atenderse al bien jurídico salvaguardado, así como a las repercusiones en la vida social que emanan de su lesión o amenaza y la importancia y necesidad de que permanezcan incólumes y, por otra parte, a las circunstancias que rodearon la comisión de la falta, así como los medios empleados para ejecutarla.

El bien jurídico que se tutela en el caso, en esencia, son los principios de profesionalismo y honradez que deben caracterizar al servicio

público, mismos que se vieron lesionados con la infracción administrativa que quedó revelada.

Esto atendiendo a que quedó demostrado que _____ expidió recetas médicas con datos incorrectos durante los más de siete años que laboró en el Alto Tribunal, sin que en ningún momento hiciera alguna aclaración al respecto, permitiendo con ello una percepción incorrecta de la realidad, en tanto que dicha conducta le es reprochable puesto que se percató de ese dato sin haber hecho nada para que se corrigiera, y sobre todo porque se ostentó como especialista, sin acreditar en momento alguno la existencia de la cédula respectiva.

V. Reincidencia. De la constancia de catorce de octubre de dos mil dieciséis se advierte que en el registro de servidores públicos sancionados que se lleva en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial no se tiene nota de que _____

_____ haya sido sancionado con motivo de alguna falta administrativa, de ahí que no se actualice el supuesto de reincidencia.



VI. Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

En la especie no existe prueba de que el infractor hubiera obtenido algún beneficio o lucro indebido, ni ocasionado daño o perjuicio económico a este Alto Tribunal con motivo de la infracción en que incurrió.

En mérito de las consideraciones que anteceden, y atendiendo además a la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan el deber que se impone a los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de actuar bajo los principios de legalidad, profesionalismo y honradez, atendiendo lo dispuesto en cualquier norma que resulte aplicable, esta Presidencia estima que debe imponer al infractor la sanción consistente en la inhabilitación por un año (contado a partir de que se le notifique al involucrado la presente resolución) para desempeñar algún empleo, cargo o comisión en el servicio público, con base en lo previsto en los artículos 135, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación⁶, 45, fracción VI, del Acuerdo General Plenario 9/2005⁷ y 13, párrafo segundo, de la Ley Federal de

⁶ "Artículo 135. Las sanciones aplicables a las faltas contempladas en el presente Título y en el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos consistirán en:

II. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público;" (...)

⁷ "Artículo 45. Las sanciones aplicables a los servidores públicos que incumplan las obligaciones previstas en el artículo 2 de este Acuerdo General, consistirán en:

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos⁸.

Esta sanción se ejecutará en términos de lo establecido en el artículo 48, fracción V, del Acuerdo General Plenario 9/2005, para lo cual se ordena al titular de la Contraloría dar aviso a la Dirección General de Personal, notificar a las Direcciones Generales de Recursos Humanos tanto del Consejo de la Judicatura Federal como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; así como a la Secretaría de la Función Pública y a las Controlarías de los Estados.

Asimismo, deberá remitirse copia certificada de la presente resolución a la Dirección General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa de

II. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público;" (...)

⁸ "ARTICULO 13.- Las sanciones por falta administrativa consistirán en:

I.- Amonestación privada o pública;

II.- Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor a un año;

III.- Destitución del puesto;

IV.- Sanción económica, e

V.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se impondrán de tres meses a un año de inhabilitación.

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos.

En el caso de infracciones graves se impondrá, además, la sanción de destitución.

En todo caso, se considerará infracción grave el incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a XVI, XIX, XIX-C, XIX-D, XXII y XXIII del artículo 8 de la Ley.

Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos de la Ley por un plazo mayor de diez años, pueda volver a desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público una vez transcurrido el plazo de la inhabilitación impuesta, se requerirá que el titular de la dependencia o entidad a la que pretenda ingresar, dé aviso a la Secretaría, en forma razonada y justificada, de tal circunstancia.

La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley, quedando sin efectos el nombramiento o contrato que en su caso se haya realizado."



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

P.R.A. 10/2015

32
FORMA A

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que sea agregada al expediente personal del servidor público.

Finalmente, toda vez que con motivo de la investigación que se formuló en este procedimiento se tuvo conocimiento de que el imputado signó documentos a su nombre utilizando el número de cédula de especialidad número

que está registrada a nombre de otra persona en la Dirección General de Profesiones, se ordena dar vista al Ministerio Público de estos hechos que pudieran constituir delitos⁹. Asimismo, atendiendo a que tales hechos también podrían actualizar alguna infracción de las previstas en el capítulo VIII de la Ley

⁹ CÓDIGO PENAL FEDERAL.

CAPITULO IV. Falsificación de documentos en general

Artículo 243. El delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días multa. En el caso de documentos privados, con prisión de seis meses a cinco años y de ciento ochenta a trescientos sesenta días multa.

Si quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena de que se trate, se aumentará hasta en una mitad más. (...)

Artículo 244. El delito de falsificación de documentos se comete por alguno de los medios siguientes: (...) V.- Atribuyéndose el que extiende el documento, o atribuyendo a la persona en cuyo nombre lo hace: un nombre o una investidura, calidad o circunstancia que no tenga y que sea necesaria para la validez del acto; (...) VIII.- Expidiendo un testimonio supuesto de documentos que no existen; dándolo de otro existente que carece de los requisitos legales, suponiendo falsamente que los tiene; o de otro que no carece de ellos, pero agregando o suprimiendo en la copia algo que importe una variación substancial, y (...) X.- Elaborando placas, gafetes, distintivos, documentos o cualquier otra identificación oficial, sin contar con la autorización de la autoridad correspondiente.

CAPITULO VII. Usurpación de funciones públicas o de profesión y uso indebido de condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas, insignias y siglas

Artículo 250. Se sancionará con prisión de uno a seis años y multa de cien a trescientos días a quien: (...) II.- Al que sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedidas por autoridades u organismos legalmente capacitados para ello, conforme a las disposiciones reglamentarias del artículo 5 constitucional. a).- Se atribuya el carácter de profesionista. b).- Realice actos propios de una actividad profesional, con excepción de lo previsto en el 3er. párrafo del artículo 26 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 4º. y 5º. Constitucionales. c).- Ofrezca públicamente sus servicios como profesionista. d).- Use un título o autorización para ejercer alguna actividad profesional sin tener derecho a ello. e).- Con objeto de lucrar, se una a profesionistas legalmente autorizados con fines de ejercicio profesional o administre alguna asociación profesional. (...)

Reglamentaria del Artículo 5º. Constitucional, dese vista a la Dirección General de Profesiones, para los efectos legales a que haya lugar.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

RESUELVE:

PRIMERO. Quedó plenamente acreditada la causa de responsabilidad administrativa materia del presente procedimiento, atribuida a

_____, responsable de la falta administrativa por la que se inició este procedimiento, conforme a lo señalado en el considerando segundo de la presente resolución.

SEGUNDO. Se impone al servidor público _____, la sanción consistente en **inhabilitación por un año para desempeñar algún empleo, cargo o comisión en el servicio público**, la cual deberá ejecutarse en términos de lo señalado en el último considerando de este fallo.

Devuélvase el expediente a la Contraloría de este Alto Tribunal para los efectos legales a que haya lugar y, en su oportunidad, archívese como asunto totalmente concluido.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

P.R.A. 10/2015

324
FORMA A

Así lo resolvió el Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien actúa con el Licenciado Alejandro Manuel González García, Secretario Jurídico de la Presidencia de este Alto Tribunal que certifica.



Esta hoja corresponde al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 10/2015.

OCHC

SIN TEXTO

